



DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA
UNIDAD DE FISCALÍA
SGS Nº CAS-29771; 29773

CAS .: 29771 -29773 /

ANT.: 1) Solicitud de Acceso de Información, N°. SGS CAS-29771 Y 29773, de 20.01.2021 de [REDACTED]

[REDACTED]
2) Resolución Exenta N° 0153, de fecha 31 de enero del 2018, Delega facultad de firma en respuestas de solicitudes de acceso Ley N° 20.285 de la Dirección del Trabajo. Modificada por Resolución exenta 664, de fecha 22 de abril de 2019.

MAT.: Responde requerimiento de información que indica.

SANTIAGO; 03 de febrero de 2021.

DE : JEFA UNIDAD DE FISCALÍA (S)
DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

A : [REDACTED]
[REDACTED]

Mediante la presentación del antecedente, Ud. ha solicitado a esta Dirección del Trabajo, mediante los mecanismos establecidos en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informe en el siguiente tenor:

"FAVOR NECESITO COPIA DEL INFORME DE EXPOSICIÓN DEL RECLAMO N° 1323-2020-1504 PRESENTADO POR [REDACTED] [REDACTED] POR SEPARACIÓN ILEGAL DE TRABAJADOR CON FUERO SINDICAL EN CONTRA DE LA EMPRESA REDBUS URBANO SA"

Sobre el particular, cumple con informar Ud. en forma previa que los requerimientos de la información que obran en poder de los Órganos de la Administración del Estado, deben ser tramitados conforme a las disposiciones de la ley N° 20.285, que regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los Órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información y su Reglamento publicado con fecha 13.04.09, en el Diario Oficial.

Ahora bien, analizada su presentación a la luz de las disposiciones legales y reglamentarias de la ley N° 20.285, se hace presente que la materia consultada, y bajo este contexto, no reviste el carácter de público, ya que corresponde a informes sobre de prácticas antisindicales.

Al respecto, en materia constitucional, las Prácticas Antisindicales y desleales, constituyen una vulneración a la libertad sindical, constituida por el derecho a la negociación colectiva y la huelga y el derecho a la sindicalización, consagrados en nuestra Constitución Política de la República (CPR), artículos 19 N°

16 y 19 N° 19, respectivamente, además, de los **convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por el Estado de Chile.**

También cabe tener presente que el procedimiento que debe observarse en la investigación de denuncias por prácticas antisindicales y desleales, se encuentra regulado en los artículos 289 al 294 bis del Código del Trabajo, y artículos 403 al 407 del mismo cuerpo legal, respectivamente.

Por su parte el Código Laboral, señala en su artículo 292 que; “El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales se sustanciará conforme las normas establecidas en el Párrafo 6º, del Capítulo II, del Título I, del Libro V, del presente Código.”. A su vez, el artículo 407 a la letra dispone: “Procedimiento aplicable. El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales en la negociación colectiva se sustanciará conforme a las normas establecidas en el Párrafo 6º del Capítulo II del Título I del Libro V del presente Código”, es decir, **el legislador les hace aplicable el procedimiento de tutela laboral.**

Respecto de los derechos fundamentales la Constitución Política del Estado, señala en su **artículo 5 inciso final** que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los **derechos esenciales** que emanan de la naturaleza humana. **Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución**, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, este Servicio, en el cumplimiento sus funciones, y velando por el respeto a los derechos fundamentales, ha estimado que la información requerida, es decir, documentos que contengan las denuncias por prácticas antisindicales presentadas ante la Dirección del Trabajo, es información reservada, lo que ha sido ratificado por el Consejo para la Transparencia.

En cuanto al procedimiento que debe observarse en estas fiscalizaciones, el Servicio con el objeto garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y dando cumplimiento al mandato Constitucional de resguardar tales derechos, ha regulado el procedimiento administrativo de las denuncias por vulneración de Derechos Fundamentales mediante su Orden de Servicio N° 2 de 29.03.2017 y su Circular N° 28 de 03.04.2017, documentos que se encuentran disponibles en la página web de la Dirección del Trabajo : <https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/AL003/AIP/ADCSR>

Además es preciso señalar que el Consejo para la Transparencia, en Decisión C3114-17, de 28.12.2017, rechazó el amparo interpuesto en contra de este Servicio, por anterior negativa a entregar documentación relativa a procedimientos de “**PRÁCTICAS ANTISINDICALES**” ya tramitado señalando en su considerando 2), “que cabe tener presente que según razonado este Consejo **“no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo, y el riesgo de su divulgación, así como la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)”**.

Así mismo ha resuelto que la publicidad, comunicación, o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado(Decisiones de amparo Roles C1174-15, C1248-15, C1387-15, 4326-16). Todo lo cual debe entenderse dando cumplimiento también a las disposiciones de la **Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales.**

Dicho pronunciamiento se encuentra incorporado en el referido link y contiene los fundamentos jurídicos de la decisión de negativa a entregar la referida información relativa a investigaciones sobre denuncias por vulneración de derechos fundamentales. Y en su considerando señala: **“4) que la divulgación de los antecedentes como los solicitados, puede inhibir que los trabajadores afectados por conductas que vulneren sus derechos fundamentales, presentes denuncias ante el organismo fiscalizador, lo cual afectaría el debido cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, igualmente la información consultada es reservada en conformidad a lo dispuesto en art. 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.”**

En términos prácticos, el procedimiento en comento persigue determinar si existen o no indicios de agravios a las referidas garantías constitucionales señaladas en la ley, facultando a este Servicio para que en el ejercicio de sus facultades, de oficio o ante una denuncia, investigue tales hechos, actuación que se encuentra regulada en las ya mencionadas Orden de Servicio N° 2 de 29.03.2017 y su Circular N° 28 de 03.04.2017 (ver en banner de Transparencia), y cuya tramitación concluirá con la emisión de las conclusiones jurídicas en que se determinará si en la situación investigada se presentan o no indicios de vulneración. En caso de haber indicios de la vulneración denunciada, previamente antes de denunciar al tribunal, realizará la mediación respectiva.

Conforme lo señalado precedentemente, resulta razonable estimar que acceder a la entrega de estas materias, -(en este caso los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa)-, por una parte afectaría derechos de trabajadores denunciantes y declarantes, en cuanto a su estabilidad laboral, económica, vida privada, integridad física y psíquica, entre otros, de lo cual resulta aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley 20285, como también pudiera conllevar a quienes pretendan formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado, se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta.

Asimismo, se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, cuestión que, en la materia que se ventila en el presente reclamo, podría traducirse en que los trabajadores se inhiban de denunciar actos que vulneran sus garantías fundamentales y que, por consiguiente, las Inspecciones del Trabajo se vieran impedidas de ejercer las atribuciones que en la materia le otorga la ley. La afectación es sobre la credibilidad que trabajadores depositan en el Servicio.

Por otra parte, debemos tener presente que lo requerido corresponde a funciones propias del Servicio, y que dado el carácter fiscalizador de éste contenido en el D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión social. **LEY ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.** Título V sobre Prohibiciones, en su artículo 40 se señala expresamente: *“Queda prohibido a los funcionarios del Trabajo, bajo pena de suspensión o destitución, divulgar los datos que obtengan con motivo de sus actuaciones. Incurrirán, además, en las sanciones establecidas en el artículo 246 del Código Penal si revelaren secretos industriales o comerciales de que hubieran tenido conocimiento en razón de su cargo.*

Sin perjuicio de lo señalado, se hace presente que siendo la Ley N° 20.285 de Transparencia, un “**procedimiento especial**” para requerir información de los entes públicos, que impide a éstos solicitar la identificación a los requirentes de información al momento de efectuar una solicitud, estableciendo causales de reserva, especialmente a terceros no titulares de ella, oportuno es informar a Ud. de la existencia del “**procedimiento general**” establecido en la **Ley 19880 que regula las Bases de los Procedimientos Administrativos de los Actos de la Administración del Estado**, en el **artículo 17º letra a)**, el cual permite acudir personalmente al Órgano Público, en su calidad de parte directa o titular de la información, acreditando su condición, para ser informado del estado de su denuncia, proceso o investigación y/o requerir copias de ellos una vez que estos hayan finalizado, concepto que ha sido ratificado por el Consejo para la Transparencia en su **Instrucción General N° 10 Sobre el Procedimiento Administrativo de**

Acceso a la Información de fecha 28 de octubre de 2011, refiriéndose a la entrega de información de carácter personal indica **en su numeral 4.3** que, cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, **sólo procederá la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad (denunciante) o por su apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880**. Tal gestión, en su caso, puede ser realizada en la Inspección Comunal del Trabajo Santiago-Poniente.

Conforme lo anterior, esta Dirección del Trabajo se encuentra impedida jurídicamente, -mediante esta Plataforma de la Ley de Transparencia, informar del proceso por Vulneración de Derechos Fundamentales referido a prácticas antisindicales, salvo el procedimiento anterior.

Finalmente, de no encontrarse conforme con la respuesta precedente, Ud. podrá interponer Amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la misma.

De esta manera, la Dirección del Trabajo da cumplimiento a su requerimiento de información pública, de acuerdo a lo previsto en los artículos N° 10, 15, 17, 21 N° 1 y 2 y 23 de la Ley N° 20.285, Sobre Transparencia y Acceso a Información Pública y Ley 19.628, sobre Protección de Datos Personales.

Por orden de la Directora del Trabajo

Saluda cordialmente a Ud.



PAULA ORTEGA SOLIS
ABOGADA
JEFE UNIDAD DE FISCALÍA (S)
DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA
DIRECCIÓN DEL TRABAJO